

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por ADRIANA MARIA VELEZ DIEZ en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. (Radicado 05001-31-05-022-2017-00678-01). Al proceso fueron vinculados en calidad de intervinientes excluyentes a las señoras Adriana María Montoya Castaño y Catalina Correa Polo, y en calidad de litisconsorte necesario Camilo y Carlos Andrés Correa Montoya.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Carlos Alberto Correa Arango en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó con base a los siguientes hechos: el señor Carlos Alberto Correa Arango cotizó más de 50 semanas en los 3 años anteriores a su muerte, que lo fue el 25 de septiembre de 2015 en la ciudad de Panamá; convivió en unión marital con el señor Correa Arango desde el año 2008, sin presentarse interrupción alguna hasta el día de su muerte; dependía económicamente de su compañero permanente, pues era este quien sufragaba los gastos del hogar; fue ella quien acompañó a su compañero en sus últimos años de vida, brindándole apoyo; el 18 de noviembre de 2016 le solicitó a Porvenir S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente, la misma que fue negada mediante comunicación del 2 de marzo de 2017, con el argumento que existía controversia en la reclamación de la pensión, dejándose en suspenso hasta tanto fuera la jurisdicción competente la que determine a quien le corresponde el derecho.

Porvenir S.A. atendió de manera oportuna el libelo, indicando que no se opone al reconocimiento de la pensión en la medida que se acredite la calidad de compañera permanente. Refiere que el señor Camilo Correa Montoya y el joven Carlos Andrés Correa Montoya, representados por su madres Adriana María Montoya Castaño, ya acreditaron ante la entidad su calidad de beneficiarios como hijos del causante Carlos Alberto Correa Arango, razón por la cual la administradora les ha venido pagando el 50% de la pensión de sobrevivientes, a su vez, la señora Montoya Castaño también presentó reclamación pensional en calidad de cónyuge supérstite, circunstancia de orden legal que debe ser dirimida por la justicia ordinaria, por lo que ha dejado en reserva el otro 50% de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Correa Arango, hasta esta se pronuncie. Frente a los hechos de la demanda dijo que eran ciertos los que hacen referencia a que el causante dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, la fecha del fallecimiento de este y las reclamaciones y respuestas dadas a la actora. De los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepciones las que denominó falta de integración de la Litis consorcio necesaria por activa, pago, falta de causa para pedir y buena fe.

Mediante auto del 10 de abril de 2018, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín dio por contestada la demanda por parte de Porvenir S.A., y ordenó vincular al proceso a la señora Adriana María Montoya Castaño, la joven Catalina Correa Polo, en calidad de intervinientes excluyentes, dadas sus condiciones de cónyuge supérstite e hija; así mismo a los jóvenes Camilo y Carlos Andrés Correa Montoya en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, toda vez que son hijos del causante y quienes por información de la administradora, se encuentran percibiendo la pensión de sobrevivientes de su padre fallecido.

El abogado Jaime Alberto Vargas Peña, como apoderado de la señora Adriana María Montoya Castaño y de Camilo y Carlos Andrés Correa Montoya, mediante escrito “...*presento ante este despacho Judicial CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA...*”, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos indicó que eran ciertos los relativos a que el causante dejó acreditados los derechos para la pensión de sobrevivientes y la data de la muerte de este. Sobre los demás dijo que no le constaban. No formuló excepciones.

La señora Catalina Correa Polo se presentó ante el juzgado de conocimiento el 28 de agosto de 2018 a recibir notificación personal del proceso, indicándole que contaba hasta la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para que proceda de conformidad.

Pese a que las señoras Adriana María Montoya Castaño y Catalina Correa Polo fueron notificadas debidamente, no presentaron demanda como intervinientes excluyentes.

Surtido el trámite de rigor, mediante sentencia del 25 de octubre de 2021, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación, por lo que ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora Adriana María Vélez Díez, a quien le impuso las costas del proceso, fijándole como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte demandante, el cual le fue concedido. Como argumentos expone que los familiares del causante no tenían conocimiento de la vida de éste en su último año de vida, ni que estaba en Panamá al momento de su muerte, indicando igualmente que los testigos son contradictorios en sus dichos, pues presentan diferencias frente a situaciones fácticas. Indica que fue la demandante quien se quedó con los bienes muebles del causante y se hizo cargo de los cánones de arrendamiento que estaban vencidos del apartamento donde vivían con el fin de terminar el contrato de la mejor forma. Refiere que las pruebas documentales no fueron tachadas por ninguna de las partes y que el juez de instancia "*las desvalora*" aduciendo que son supuestos y hace referencia al contrato de arrendamiento y su terminación diciendo que son distintos, pero se trata de la misma agencia de arrendamientos y se le solicita a esta misma la terminación del contrato, el cual igualmente sirve para determinar los extremos de la relación en calidad de compañeros permanentes.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Carlos Alberto Correa Arango falleció el 25 de septiembre de 2015 en Panamá (fl. 5 anexo 3); que ante la AFP Porvenir S.A., se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes las señora Adriana María Montoya Castaño y Adriana María Vélez Díez, en calidad de cónyuge y compañera permanente, a quienes les fue negado el derecho a la pensión de sobrevivientes por presentarse controversia entre beneficiarios, así como Camilo y Carlos Andrés Correa Montoya en calidad de hijos, a quienes les fue reconocida la pensión de sobrevivientes en porcentaje del 25% para cada uno.

Acorde a lo anterior y a los argumentos de la alzada, el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si la señora Adriana María Vélez Díez acreditó en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de compañera permanente de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del afiliado Carlos Alberto Correa Arango, ocurrida el 25 de septiembre de 2015.

Ahora bien, por la fecha de la muerte del causante se tiene que la normatividad a aplicar es la inserta en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Sobre esta materia debe recordarse, siguiendo para el efecto claras directrices establecidas por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que las regulaciones aplicables son las vigentes al momento de la muerte del causante: *“La Corte ha señalado de antaño, que es la fecha del fallecimiento del causante la que determina la normatividad aplicable para efectos del reconocimiento de la prestación de sobrevivencia”* (SL 343-2018).

Para el caso de autos, resulta ser el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que a la letra dice:

“Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b)(...)

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero

permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

(...)”

Así, para quien pretenda ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independiente que quien fallezca es un afiliado o un pensionado, tal como lo tiene asentado la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia con Radicado SU149-21.

Ahora bien, para analizar el requerimiento de convivencia, debe primeramente señalarse que en aplicación del artículo 61 del CPTSS, el juez se encuentra en la libertad de integrar su convencimiento a través de los medios probatorios que estime convenientes. En el caso particular, se hizo un análisis detallado de los testimonios traídos al interior del plenario y de las pruebas documentales allegadas, dejando claro que no se discute que el causante dejó acreditados los requisitos para que quien acreditara la calidad de beneficiario accediera a la pensión de sobrevivientes, la cual incluso le fue reconocida por la entidad accionada en un primero momento a los hijos del señor Correa Arango.

En cuanto a la prueba documental obrante en el plenario, se evidencia la existencia de una solicitud de arrendamiento con la inmobiliaria Santillana Ltda fechada el 4 de marzo de 2003 (fl. 10 archivo 3), en la que aparece como solicitante la señora Adriana María Vélez Díez, de un inmueble ubicado en la carrera 68 A # 47-37 apartamento 402. De igual manera, obra otro contrato de arrendamiento de vivienda urbana fechado el 27 de mayo de 2009, sin que aparezca registrado quien es el arrendador, pero si quien figura como arrendataria, la señora Adriana María Vélez Díez, de un inmueble ubicado en la circular 76 # 37-17, apartamento 401, y una comunicación suscrita por la señora Vélez Díez dirigida a Arrendamientos Santillana, solicitando la terminación anticipada del contrato de arrendamiento sobre dicho inmueble.

Tales probanzas, en su conjunto, no permiten determinar ningún tipo de convivencia o de relación entre la pareja Correa Vélez, por cuanto de la literalidad de los mismos no se desprende nada distinto que quien aparece como arrendataria es la señora Adriana María Vélez Díez, sin que obre ni siquiera como arrendatario solidario el señor Carlos Alberto Correa, ni mucho menos que tales contratos sirvan siquiera para determinar el tiempo de convivencia como lo pregona el apoderado recurrente, pues, como se dijo, no se evidencia que el causante haya hecho parte de los mismos, y mal se haría en hacer suposiciones para encontrar una realidad que no se evidencia del material probatorio allegado al plenario.

De igual manera, las demás probanzas documentales que fueron allegadas al plenario, como lo es el extracto de Porvenir del señor Correa Arango del período 2008/09/30 al 2008/12/31, en la que aparece como dirección la “*Kra 68 A AP 402 ESTADIO*”, o el pedido con fecha del 19 de octubre de 2009 de la “*DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.*”, registrando como cliente a “*CORREA ARANGO CARLOS ALBERTO*” con dirección Circular 76 # 37-17 apto 401, respecto de unas botellas de vino; o el recibo de caja provisional emitido por “*Forma Equipos para Gimnasio Ltda*” del 28 de febrero de 2011, en la que registran como dirección la circular 76 No. 37-17; o la comunicación escrita a mano alzada del 5 de marzo de 2014, la que aparece suscribiéndola el señor “*Correa Carlos*”, donde autoriza a la señora Adriana María Vélez Díez para adelantar un trámite ante la empresa TIGO, y una serie de fotografías que no identifican las personas que allí aparecen ni la data en que fueron tomadas; documentos que en conjunto no dan certeza de la existencia de una real y efectiva convivencia en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del señor Carlos Alberto, pues no puede pasarse por alto que ese es el lapso de tiempo que deben demostrar quienes pretendan ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes.

Y es que si se confrontan tales probanzas con la prueba testimonial, debe indicarse por parte de esta Sala de Decisión Laboral que de estas se puede concluir que la convivencia entre la pareja Correa Vélez no se dio en los últimos 5 años anteriores a la muerte de éste, que es el tiempo mínimo exigido por la norma para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues los mismos son

contestes y uniformes en cuanto a señalar que si bien pudo existir algún tipo de relación de pareja, esta no se mantuvo en el tiempo, pues al final de la vida del señor Correa Arango señalaron que este tenía una nueva relación con la señora Piedad Mejía, la cual presentaba como su novia en las reuniones sociales a las que asistieron juntos.

Para confirmar lo dicho, téngase en cuenta lo señalado por el señor Iván Correa Arango, hermano del causante, quien ante la pregunta ¿cuéntenos de los últimos 10 años de vida de don Carlos, dónde vivía, con quién vivía, ¿qué hacía, y si vivía con alguna persona qué hacía?, respondió “él vivió en Santa Marta muchos años, luego ya se vino a vivir aquí a Medellín, vivía aquí en Laureles, vivía con la señora Adriana un tiempo y ya después en los últimos años le conocí otra novia que se llamaba Piedad Mejía, los dos últimos años de vida de él, él falleció en Panamá, él viajaba mucho”, preguntado ¿usted dice que era novio de doña Adriana Vélez?, respondió “recién llegado de Santa Marta sí, tuvieron un noviazgo, ya cuando el falleció los dos últimos años la novia que yo le conocí se llamaba Piedad Mejía”, preguntado ¿Y cuando llegó él de Santa Marta?, respondió “el año exacto no me acuerdo doctor”, preguntado ¿sabe si él convivió en algún momento como compañero permanente o cónyuge o esposos con la señora Adriana Vélez Díez?, respondió “como esposos no porque yo nunca supe que se hubieran casado, eran novios y vivieron un tiempo juntos sí”, preguntado ¿pero sin que estuvieran casados se veía convivencia entre ellos como pareja permanente, estable?, respondió “como novios sí”, preguntado ¿describa la relación como novios que usted expone y que presencié entre su hermano Carlos y la señora Adriana Vélez?, respondió “no, él la llevaba por ahí a algunas reuniones sociales o por ahí estaba con ella como novios, como es una persona de novios, normal, en la cotidianidad”, preguntado ¿usted tuvo relación con la señora Adriana María Vélez?, respondió “cuando él estaba con ella sí, si la conocí claro”, preguntado ¿pero usted era amigo de ella?, respondió “amigos no, era la novia de mi hermano en ese entonces, amigos no, normal”, preguntado ¿conoce usted si don Carlos Correa haya vivido en una misma casa, bajo un mismo techo con doña Adriana Vélez Díez en Medellín junto con las hijas de doña Adriana Vélez?, respondió “sí, vivieron ahí en Laureles”, preguntado ¿y con ocasión de qué vivían bajo el mismo techo?, respondió “no

le sé decir”; más adelante, ante la pregunta ¿don Iván usted le había informado al señor Juez que don Carlos había tenido como última novia de doña Piedad Mejía, usted nos puede indicar por cuanto tiempo tuvo esa novia después de tener como compañera permanente a la señora Adriana Vélez Díez?, respondió “con esta señora Piedad Mejía yo vi que él estuvo como los últimos dos años de vida, más o menos”, preguntado ¿pero nos puede indicar particularmente si él se había dejado con la señora Adriana María Vélez o todavía continuaba con ella?, respondió “según me había comentado él, ya habían terminado”.

En idénticos argumentos el señor Luis Fernando Correa Arango, quien ante la pregunta “estamos haciendo aquí una investigación para conocer detalles de la vida de él (Carlos Correa) y de la señora Adriana María Vélez Díez, ¿sabe usted que ellos hayan convivido como pareja?, ¿con quién vivía el causante al momento de la muerte?, ¿Qué hacía el causante y qué hacía doña Adriana María Vélez para el momento de la muerte del señor Carlos?, todos los detalles que usted conozca de eso si es tan amable”, respondió “sí, a la señora Adriana la conocí como pareja de mi hermano en una época, no sé qué hacía ella o qué relación tenía al momento de la muerte de él, él en esa época, en los últimos tiempos estaba viviendo entre Bogotá y Panamá, no le sabría decir si en los últimos tiempos ellos eran pareja porque yo hablaba poco con él y verdaderamente él no me decía si estaba saliendo con ella, las últimas dos veces que yo lo vi, de hecho la última vez que estuvo aquí en mi casa vino con Piedad, no sé el apellido, creo que era la novia de él pero no sé el apellido de ella”, preguntado ¿sabe si para el momento de la muerte que usted dice que conoció a la demandante Adriana Vélez Díez como pareja de su hermano en algún tiempo, sabe si para el momento de la muerte esa circunstancia se presentaba?, respondió “no señor, no se presentaba porque la última novia que le conocí a él se llamaba Piedad, no me acuerdo del apellido”, preguntado ¿Y cuánto tiempo estuvo con esta última novia?, respondió “antes de que él se fuera para Panamá que él vino aquí con ella a mi casa, podría haber venido uno o dos años antes, yo no estoy muy seguro”, preguntado ¿conoce usted que tuviera relación simultánea con esta persona Piedad que usted menciona y con la señora Adriana Vélez Díez?, respondió “no señor, relación simultánea no porque yo a la señora Adriana hace muchos años ni la veo ni la volví a ver

en los últimos tiempos con mi hermano, entonces no sé si tenía otra relación simultánea, no tengo conocimiento”.

De estos testimonios no se advierten contradicciones, sino que, por el contrario, reflejan una realidad que a ellos les consta de manera personal, y mucho más siendo hermanos del causante y quienes conocieron los detalles de la vida de pareja del señor Carlos Alberto Correa Arango, y que si bien en algunos apartes de sus dichos hacen referencia de manera general a alguna circunstancia de la vida del señor Carlos Alberto, tal situación no le resta credibilidad a sus palabras, pues muestran coincidencia o concordancia frente a los hechos que rodearon la vida sentimental del causante.

No resulta de recibo los argumentos expuestos por el apoderado recurrente en cuanto a las contradicciones en los testimonios rendidos, por cuanto estos señalaron de manera coincidente que efectivamente su hermano mantuvo una relación con la señora Adriana María Vélez Díez, pero que ésta no perduró hasta la data de la muerte de este, pues son contestes en señalar que en los 1 o 2 últimos años anteriores a la muerte del afiliado, tenía una relación de pareja con la señora Piedad Mejía, la cual, como se dijo, era quien presentaba como su novia en las reuniones sociales a las que asistieron.

Cabe agregar que los testigos traídos al proceso por la parte actora, no le brindan certeza a esta Sala de Decisión que la convivencia haya persistido hasta el momento de la muerte del señor Correa Arango, pues estos indican de manera efectiva que conocieron a la pareja desde el año 2008, pero no señalan con claridad que la relación se haya mantenido hasta el 25 de septiembre de 2015, data de la muerte del causante, al indicar por ejemplo el señor Miguel Espinal que compartió con Carlos Alberto hasta el año 2013 o 2014, después no supo de él, tal como lo señaló ante la pregunta ¿usted tiene conocimiento más o menos hasta que época estuvo el señor Carlos Alberto Correa con la señora Adriana Vélez Díez?, respondió “pues mientras fuimos socios y compartimos siempre estuvo con la señora Adriana, o sea cada que yo me encontraba con él y me llevaba a su casa la señora Adriana estaba con él y las veces que viaje a una finca que tiene un yerno de la señora Adriana, creo que tiene una finca ahí en la Siria y algunas veces los acompañé allá a

esa finca y allá compartía siempre con ellos, siempre que yo no lo conocí, lo conocí con la señora Adriana”, preguntado ¿ante una pregunta del señor Juez usted señaló que ellos estuvieron más o menos hasta el año 2013, 2014, no puede sintetizar?, respondió “ellos no, yo nunca dije eso, yo lo que dije es que hasta el año 2013 o 2014 compartí con él, no recuerdo exactamente la fecha, hasta cuando yo compartí con él estaba con la señora Adriana, de ahí en adelante desconozco la situación”; en iguales términos la señora Ángela María Montoya Cardona, quien refiere que el señor Carlos Alberto vivía en Panamá porque se lo contaba la señora Vélez Diez, es decir, era una testigo de oídas y, por último, la señora Marta Cecilia Roldán Gómez, esposa del hermano de la señora Vélez Diez, quien manifiesta que no llegó a entrar al apartamento de la pareja sino que llegaba hasta la portería a dejar sus hijos allá, tampoco conoció de las condiciones en las que se desarrollaba la relación.

Así las cosas, del análisis y contraste de las pruebas allegadas al proceso se puede concluir sin dubitación alguna que no se tuvo como probado el requisito de convivencia exigido por la ley entre la pareja conformada por el señor Carlos Alberto Correa Arango y la señora Adriana María Vélez Diez en calidad de compañeros permanentes.

Lo anterior implica que la Administradora de Pensiones deberá analizar el acrecimiento pensional a que haya lugar en los términos de ley, dado el congelamiento del 50% que venía teniendo la mesada pensional a la espera de la definición de esta Litis.

Conforme a lo expuesto, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación, incluido lo relativo a las costas. Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

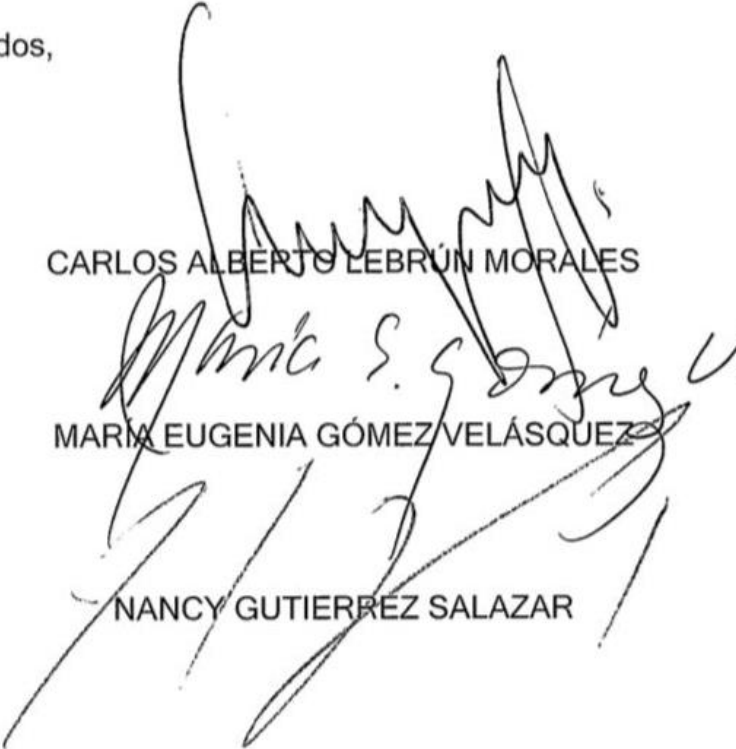
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación de fecha y

procedencia conocidas, sin perjuicio del acrecimiento pensional a que haya lugar en los términos de ley.

Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310502220170067801
Proceso: Ordinario
Demandante: ADRIANA MARIA VELEZ DIEZ
Demandado: A.F.P. PORVENIR S.A.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 22/11/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 23/11/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario